



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta n.º 44

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: GRACIELA ARANGO SIERRA
Demandado: COLPENSIONES Y OTRAS
Procedencia: JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Radicado n.º: 05001-31-05-003-2016-00391-01 (20-017)

En Medellín, a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veinte (2020), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en su carácter de sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de sentencia, procede a decidir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, dentro del proceso ordinario instaurado por **GRACIELA ARANGO SIERRA** en contra de **COLPENSIONES**, en el cual intervienen como litisconsortes necesarios por pasiva **GLORIA CECILIA BETANCUR JARAMILLO** y **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-003-2016-00391-01 (20-017).

Preside la presente, **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en calidad de magistrado ponente. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a proferir la siguiente, **SENTENCIA**:

1. ANTECEDENTES

Mediante gestora judicial la señora GRACIELA ARANGO SIERRA persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecido RAÚL DE JESÚS CORREA GONZÁLEZ, intereses moratorios, indexación, y las costas del proceso, con fundamento en que contrajo matrimonio con el causante el 31 de diciembre de 1963, haciendo vida marital con su cónyuge bajo el mismo techo hasta el año 1991, cuando el *de cujus* se fue a vivir con la señora GLORIA CECILIA

BETANCUR JARAMILLO con quien convivía al momento del fallecimiento, el 17 de julio de 2005; que mediante Resolución n.º 879 del 25 de enero de 2007, el ISS le reconoció pensión de sobrevivientes a GLORIA CECILIA BETANCUR en calidad de compañera permanente, a JUAN PABLO CORREA BETANCUR como hijo menor de edad, y a su hija en situación de discapacidad LUZ ADRIANA CORREA ARANGO; que nunca disolvió la sociedad conyugal con el fallecido; y que solicitó la pensión de sobrevivientes a Colpensiones, pero la misma fue negada por presentarse un conflicto de beneficiarias.

A través de auto del 6 de abril de 2016 (fol. 26) se admitió la demanda y se dispuso la vinculación de la señora GLORIA CECILIA BETANCUR JARAMILLO como litisconsorte necesaria por pasiva, quien una vez notificada (fol. 73), dio respuesta a la demanda a través de apoderado judicial el 29 de junio de 1994 (fols. 74 a 76), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, esgrimiendo al efecto que al existir disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre la cónyuge demandante y el pensionado fallecido, no se acredita el requisito legal para que aquella sea beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

A su turno, COLPENSIONES dio respuesta a la demanda a través de apoderada judicial el 22 de agosto de 2016 (fols. 32 a 41), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, arguyendo para ello que la parte actora no reúne los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

Mediante auto del 2 de mayo de 2018 (fol. 91), se vinculó al trámite a Empresas Públicas de Medellín, dio respuesta a la demanda el 29 de mayo de 2018 (fols. 115 a 120), expresando que al causante se le reconoció pensión de jubilación por la extinta Empresa Antioqueña de Energía.

1.1. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 24 de enero de 2020 (fols. 191 a 193 con el CD de la audiencia), oportunidad en la cual el cognoscente de instancia condenó a COLPENSIONES y a EPM a pagar a la señora **GRACIELA ARANGO SIERRA** el 25% de la pensión de sobrevivientes a partir del 15 de julio de 2012, respecto de COLPENSIONES con el pago de intereses moratorios desde el 15 de septiembre de 2015, y de EPM desde el 1º de mayo de 2015, con el pago de la indexación, a su vez gravándolas en costas procesales.

1.2. APELACIÓN

La decisión de primera instancia fue recurrida oportunamente por las apoderadas judiciales del extremo pasivo, en la forma que pasa a detallarse:

Colpensiones: Adujo que los intereses moratorios deben ser revocados, toda vez que los mismos no operan automáticamente, y la entidad no podía reconocer la prestación a la demandante al existir una pensión previamente reconocida a la señora BETANCUR JARAMILLO, mediante acto administrativo en firme, y al consultar a ésta si autorizaba la revocatoria de dicho acto administrativo, ésta se rehusó a hacerlo.

EPM: Arguye que no hay lugar al retroactivo, toda vez que la falta de reconocimiento pensional oportuno se debió a la inactividad de la parte actora, quien nunca reclamó derecho alguno a EPM. Sostiene que no existió convivencia simultánea del causante con la demandante y la señora BETANCUR JARAMILLO, por lo cual no puede compartirse la mesada pensional, pues esto sólo lo permite la norma en el caso de convivencia simultánea, a más que la demandante liquidó la sociedad conyugal con el causante, y la normativa exige que la misma esté vigente al momento del fallecimiento para ser beneficiaria de la prestación económica. Finalmente, afirma que EPM debe ser exonerada de la condena en costas, pues nunca se opuso a las pretensiones de la demanda, pero no podía arrogarse competencias judiciales para decidir el conflicto de beneficiarias suscitado.

A su vez, oportunamente alegó de conclusión la apoderada judicial de EPM, que en el presente caso se presentó un periodo de convivencia simultánea entre la demandante y la litisconsorte necesaria por pasiva, y otros lapsos de convivencia exclusiva del causante con cada una de ellas, razón por la cual la proporción de la pensión concedida a cada una no puede partir del supuesto de que el causante convivió todo el tiempo simultáneamente con ambas. En igual sentido, adujo que su representada siempre ha pagado la pensión de sobrevivientes de buena fe, por lo cual no procede condenar al pago del 125% de la pensión de sobrevivientes como lo indicó el *a quo* (fols. 199 a 202).

En la oportunidad para alegar de conclusión, la apoderada judicial de la demandante alegó que la demandante acreditó los requisitos legales para ser beneficiaria de la

pensión de sobrevivientes, solicitando en consecuencia la confirmación de la sentencia de primera instancia (fol. 228 a 233).

1.4. CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia fue desfavorable a COLPENSIONES, se examinará la sentencia en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el al grado jurisdiccional de consulta a favor de la señora GRACIELA ARANGO SIERRA, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: 1) Si la señora GRACIELA ARANGO SIERRA acreditó los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor RAÚL DE JESÚS CORREA GONZÁLEZ (q.e.p.d.), y de ser así, la fecha a partir de la cual procedería el reconocimiento pensional, si se causaron los intereses moratorios, la indexación y las costas procesales.

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **revocatorio**, en tanto la demandante no cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 17 de julio de 2005 (fol. 10).

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado que fallezca, punto sobre el cual no hay controversia, en tanto que COLPENSIONES admitió haber reconocido la pensión de sobrevivientes a favor de otros beneficiarios (fol. 33), y EPM admitió que RAÚL DE JESÚS CORREA GONZÁLEZ fue pensionado por jubilación anticipada (fols. 116), además de que obran en el legajo copia de los actos administrativos mediante los cuales se reconocieron dichas prestaciones económicas (fols. 51 a 56 154 a 146).

Acreditado que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, sólo para el caso en que el causante sea pensionado, conforme al reciente cambio jurisprudencial sentado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL1730-2020, siendo que la acreditación de tales requisitos es carga procesal de prueba de los eventuales beneficiarios, tal como lo adoctrina la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicación n.º 38213 del 28 de septiembre de 2010, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

Ahora, en cuanto a la situación del cónyuge separado de hecho, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL1510- 2014 y de manera prístina en la del 29 de noviembre de 2011 Rad. 40055, precisó que la hipótesis del inciso 3º del literal b) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003 tiene aplicación también para el evento en que, luego de la separación de hecho del cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, el causante no establezca una nueva comunidad de vida, evento en el cual la convivencia de los 5 años de que trata la norma para el cónyuge supérstite puede ser cumplida en cualquier tiempo, sin que se exija que continúe actuante el vínculo afectivo al momento del fallecimiento, como previamente aquilataba el máximo

tribunal de esta especialidad, conforme al cambio de línea de interpretación prohiado con la sentencia SL5169-2019.

Empero, bajo el anterior supuesto, respecto al requisito de la vigencia de la sociedad conyugal para el cónyuge separado de hecho, consagrado en la parte final del inciso 3° del literal b) del Art. 13 de la Ley 797 de 2003, adoctrinó la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, que:

“(…) en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario. (…) el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto es, proteger el núcleo familiar del causante (…) [teniendo] como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, (…) la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración en materia pensional (…), establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite (…) separado de hecho, (…), guiada por los principios que definen la pensión de sobrevivientes. (…) no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los efectos [civiles] que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo 1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por (…) las “pensiones” (…). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda.”

De forma que, a diferencia del caso de la convivencia simultánea, en el supuesto de la cónyuge separada de hecho del causante al momento del fallecimiento, la doctrina constitucional impone que deba satisfacerse el requisito legal de la vigencia de la sociedad conyugal, a efecto de que la cónyuge supérstite pueda acreditar los 5 años de convivencia en cualquier época.

En este punto, resulta pertinente precisar, que no desconoce esta Corporación que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha admitido que la cónyuge superviviente acredite los 5 años de convivencia en cualquier época, aún bajo el supuesto de haberse liquidado la sociedad conyugal antes del óbito, como lo hizo desde la sentencia del 13 de marzo de 2012 con radicado 45038, y más recientemente en sentencia SL5141-2019, en consideración a que: *“a efectos de la protección del derecho de la seguridad social incumbe, es demostrar si entre la pareja perduraron esos «lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja»*”; no obstante, dicha doctrina se adoptó con antelación al proferimiento de la sentencia C-515 de 2019, de cuyo que, no pudieron tenerla en cuenta, pese a su inconcuso carácter *erga omnes* y su consecuente aplicación preferente.

Adicionalmente, la doctrina de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia según la cual a la cónyuge separada de hecho le bastaba acreditar la vigencia del vínculo afectivo, fue revisada por la Alta Corporación en posterior sentencia SL5169-2019, en la cual asentó que: *“en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b)*”, cambio a partir del cual puede colegirse que, si no se pueden exigir más requisitos que los que consagra la norma, *a contrario sensu*, no pueden dejar de exigirse los requisitos consagrados expresamente en la disposición legal en cita.

Ello así, como desde la demanda se asiente que para el momento del fallecimiento no existía convivencia simultánea, en tanto se afirma que desde el año 1991 el causante *“sufrió una crisis con su esposa (...) yéndose a vivir con la señora GLORIA (...)”* (fol. 1), el asunto que amerita un análisis probatorio exhaustivo es si la señora GRACIELA ARANGO SIERRA a pesar de su separación de hecho, al momento del fallecimiento contaba con vínculo conyugal vigente y sin liquidación de sociedad conyugal, y de ser así, si acredita que convivió ininterrumpidamente con el causante durante 5 años en cualquier época.

La vigencia del vínculo conyugal se encuentra demostrada con el registro civil de matrimonio aportado (fol. 9), conforme al cual la señora GRACIELA ARANGO SIERRA

y el señor RAÚL DE JESÚS CORREA GONZÁLEZ contrajeron matrimonio el 31 de diciembre de 1963, sin embargo, también se probó que la sociedad conyugal fue disuelta y liquidada mediante Escritura Pública n.º 2640 del 29 de junio de 1994 (fols. 78 a 80), debiéndose concluir que realmente la demandante no contaba con sociedad conyugal vigente con el causante al momento del deceso.

De lo expuesto, refulge palmar que, conforme a la doctrina constitucional, la demandante no se encuentra bajo el supuesto del inciso final del literal *b)* del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que permite acreditar los 5 años de convivencia en cualquier época, y por tanto, sólo podría acceder al beneficio pensional si su convivencia con el causante se hubiere dado hasta el momento de la muerte, como exige el literal *a)* de la normativa en comento, presupuesto que tampoco cumple, al haber reconocido desde la contestación de la demanda que se separó de hecho del *de cujus* desde el año 1991.

En gracia de discusión, aún bajo el supuesto de que la demandante reclamare la pensión de sobrevivientes porque a pesar de la separación, perduraron los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, tenemos que la testigo LUZ MARINA CORTÉS OSPINA, traída al juicio por la misma accionante, expresó que desde el año 1994 el causante ni siquiera volvió a colaborarle económicamente a la demandante (min. 13:00), a la par de que ésta confesó que después de tal anualidad no recibió ningún tipo de ayuda económica del fallecido, como bien lo acotó el *a quo* (min. 2:06:00).

Así pues, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión en términos del artículo 61 del CPT y de la SS, se extrae que con el acervo probatorio recaudado se probó que la demandante no tenía sociedad conyugal vigente con el causante al momento el óbito; que a partir del año 1991 cesó la convivencia entre los susodichos y la misma jamás se reanudó, y que desde el año de 1994 cesó todo lazo afectivo y de ayuda mutua entre ellos, por lo que no se logra probar que la señora GRACIELA ARANGO SIERRA sea beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite.

En consideración a lo anterior, se impone para la Sala revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, para en su lugar, negar todas las pretensiones incoadas por la GRACIELA ARANGO SIERRA.

2.3. COSTAS

Sin costas en esta instancia a favor de COLPENSIONES, por revisarse la sentencia de primera instancia en el grado jurisdiccional de consulta en su favor. Costas a cargo de GRACIELA ARANGO SIERRA y a favor de EPM, por haberse resuelto desfavorablemente a aquella el recurso de apelación propuesto por ésta, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$877.803**, equivalentes a un (1) SMLMV. Las de primera se revocan, y correrán a cargo de GRACIELA ARANGO SIERRA, y a favor de COLPENSIONES, de GLORIA CECILIA BETANCUR JARAMILLO y de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, a prorrata. Tásense.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO: REVOCAR la sentencia venida en apelación y consulta proferida el 24 de enero de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, **ABSOLVER** a COLPENSIONES, a GLORIA CECILIA BETANCUR JARAMILLO y a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN de todas las pretensiones incoadas por GRACIELA ARANGO SIERRA, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de GRACIELA ARANGO SIERRA y a favor de EPM, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$877.803**. Las de primera se **REVOCAN**, y correrán a cargo de GRACIELA ARANGO SIERRA y a favor de COLPENSIONES, de GLORIA CECILIA BETANCUR JARAMILLO y de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, a prorrata. Tásense.


Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.


Se declara surtida la presente decisión y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.




VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada




CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial

Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.



SECRETARÍA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL
SECRETARÍA
Secretario Sala Laboral

Certifico: Que la decisión anterior fue notificada por **ESTADOS No. 090** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a través de la página Web a las 8:00 a.m. Medellín, **14 de julio de 2020**

Secretario